

AGENDA CIUDADANA

UNA PROBLEMÁTICA AUTOEVALUACION PRESIDENCIAL

Lorenzo Meyer

¿Transición exitosa o regresión?

En su último informe presidencial, y para sorpresa de nadie, Carlos Salinas de Gortari afirmó que durante su sexenio y en materia de democracia política, se avanzó una enormidad, y la concreción de ese avance fueron las elecciones de 21 de agosto, donde volvió a triunfar el PRI. El autoritarismo, dijo el presidente en su mensaje político, quedó superado por la lógica del liberalismo social. Si eso fuera cierto, estaríamos en presencia de un enorme logro histórico, pues se habría alcanzado lo que se ha buscado desde 1821. Pero ¿es verdad?, creo que hay elementos para la duda.

En las ciencias sociales la objetividad plena es un imposible, y la probabilidad de acercarse a ella disminuye aún más si se intenta desde el discurso del político en el poder. Ahora bien, cuando ese discurso pretende ser, además, una autoevaluación final -como es todo informe presidencial de fin de sexenio-, entonces de la objetividad sólo quedan fragmentos.

Para tener una idea de donde estamos en materia de democracia -y sin pretender ser un observador totalmente objetivo- se puede tomar como punto de arranque una conferencia reciente que dio en la UAM-Xochimilco el profesor de Stanford, Philippe E. Schmitter. El tema por él tratado fue el tránsito de la autocracia (dictadura personal, autoritarismo o totalitarismo) a la democracia. Su análisis partió de una premisa relativamente pesimista, pero realista y buen antídoto contra la demagogia: en

ningún caso la democracia es inevitable, un país puede no experimentarla nunca.

En efecto, la evolución de las autocracias no tiene necesariamente que desembocar en alguna forma de democracia. La modernización económica capitalista y neoliberal, **no requiere** como elemento indispensable, de un entorno político liberal, plural y democrático. En realidad, como lo demuestra el caso de Singapur, y por buen tiempo los de Taiwán o Corea del Sur -que aún hoy no son democracias firmes-, se pueden combinar muy bien y por mucho tiempo una política autocrática con eficiencia, modernización y crecimiento económicos, sobre todo si se tiene el apoyo político norteamericano, como es hoy el caso de México.

La experiencia histórica de América Latina en este siglo, y de otras regiones del mundo periférico, muestra que, desafortunadamente, es posible transitar de un tipo de autocracia a otra y quedarse ahí. Schmitter, en un trabajo que elaboró en asociación con Guillermo O'Donnell (Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre democracias inciertas, 1988; el original en inglés es de 1986), considera la posibilidad de evolucionar del autoritarismo hacia un sistema híbrido, es decir, a uno que si bien ya tiene elementos de lo nuevo y moderno -lo democrático-, también conserva mucho de lo viejo -de lo autocrático- y donde la disputa entre ambos no se resuelve sino que se congela.

El Sistema Híbrido.

En ese trabajo de 1986, Schmitter y O'Donnell hablan de "dictablandas" y "democraduras", según predominen en ellas los

elementos autoritarios o democráticos. Si somos optimistas pero realistas, en el México de hoy tenemos una "democradura" que surgió de una "dictablanda", es decir, de un autoritarismo no excluyente, corporativo, con partido de Estado, y cuyo origen fue la primera revolución social del siglo XX. Ahora bien, sin un gran esfuerzo de la sociedad por llevar adelante el cambio, la élite política está más que dispuesta a estacionarse en esta "democradura" por tiempo indefinido y llamarle democracia o liberalismo social, como lo acaba de demostrar Carlos Salinas.

La transición mexicana de la "dictablanda" postrevolucionaria -la famosa "dictadura perfecta" de Mario Vargas Llosa- a la "democradura", se inició hace tiempo, pero es con Carlos Salinas que adquirió su forma plena. Las reformas políticas son un buen mejor indicador de este largo proceso. Fue en junio de 1963 cuando Adolfo López Mateos modificó la constitución para crear los diputados de partido; el objetivo era entonces incorporar dentro de las instituciones autoritarias a la oposición partidista, pero sin darle poder y el congreso era el mejor lugar para combinar ambos propósitos. La razón de tal decisión se encuentra en los temblores que causaron dentro del sistema los movimientos disidentes dentro de los gremios ferrocarrilero y magisterial a fines de los 50, la revitalización de la izquierda por la Revolución Cubana, el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional y el boicot del PAN a la Cámara de Diputados. Pero llegó el 68 y la sacudida al *stablishment* mostró los límites del 63. Luis Echeverría respondió con grandes dosis de populismo y con otra reforma política -la de 1973-, que

redujo tanto la edad del votante como el porcentaje necesario para que la oposición partidista tuviera representantes en un congreso ligeramente ampliado pero igualmente inútil pero que, se supuso, resultaría un camino más atractivo que la guerrilla para los disidentes. La soledad de la candidatura de José López Portillo en 1976 -una victoria sin sabor ni sustancia, pues no hubo opositor oficial- y la crisis del neopopulismo, llevaron a la reforma de 1977, que apartó 100 curules de 400 para los partidos minoritarios en el entendido de que "lo que resiste apoya" (Jesús Reyes Heróles), pero asegurándose que tales "apoyos resistentes" no pudieran llegar nunca a obtener la mayoría.

La "democradura" salinista

La "tercera ola democrática" mundial tardó en llegar a México, pero cuando llegó - el de julio de 1988- fue un maremoto político que ahogó la tímida reforma del 77 y volvió a dejar sin apoyo y desnudo al autoritarismo mexicano, cuya falta de legitimidad -la "caída" del sistema de cómputo de los votos- creció en la misma proporción en que otros autoritarismos latinoamericanos morían. El autoritarismo -la "dictablanda"- sobrevivió, pero la presión en su contra fue tal que debió ser contenida, y sólo a medias, por tres reformas -¡tres!- a lo largo del sexenio de Carlos Salinas: 1990, 1993 y 1994. Las dos primeras fueron resultado de las negociaciones de la presidencia con la oposición de centro derecha: el PAN. La tercera fue producto de la presión ejercida por la oposición mas combatida por el gobierno y por sus apoyos de la derecha: la de centro izquierda -PRD y el cardenismo- y, sobre todo, por el inesperado

levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. El EZLN de plano desconoció cualquier valor a las reformas salinistas y justificó su recurso a las armas por el fraude de 1988 y por la antidemocracia imperante, aunada a los terribles efectos del neoliberalismo en las capas más bajas de la sociedad.

La actual "democradura" mexicana es el resultado acumulado de las reformas políticas impuestas al autoritarismo presidencial, de la tenacidad de la oposición y del ambiente generado por la ola democrática internacional. Todos estos factores terminaron por forzar a la élite política mexicana - antidemocrática como siempre, pero pragmática y flexible-, a aceptar ciertos cambios en las reglas del juego, cambios importantes pero insuficientes para llevar a México a engrosar las filas de los países democráticos. El cambio más significativo consiste en el hecho de que hoy, tras 65 años de soledad, el partido de Estado tiene que aprender a convivir con movimientos ciudadanos y con dos grandes partidos de oposición que tienen ya intereses creados y el respaldo de la mitad del electorado.

La agenda para superar la "democradura".

Pese a lo afirmado por Carlos Salinas el 1° de noviembre, aún falta un buen trecho que recorrer para que los mexicanos lleguemos a dar forma a una democracia real y medianamente aceptable. Un botón de muestra es el informe de los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral (IFE) -una de las grandes innovaciones de la reforma de 1994- sobre la calidad de las elecciones del 21 de agosto, que tanto orgullo produjeron en

Salinas. Para los consejeros ciudadanos, el tipo de contienda electoral que vivimos en 1994 no debe volverse a repetir pues es inaceptable. La lucha entre el partido de Estado y sus oponentes por la victoria en las urnas fue todo menos justa y democrática. Desde el punto de vista de los consejeros ciudadanos -que representa el de muchos mexicanos con espíritu ya no de súbditos sino de ciudadanos-, es necesaria e inaplazable una nueva reforma electoral y política -la verdadera reforma democrática, pospuesta desde 1963- si se pretende que no nos estanquemos en la "democradura", como pretende la élite del poder.

Mientras no haya un acuerdo entre los grandes actores en torno a las reglas del juego político -acuerdo que si se da en todas las democracias reales-, no habremos superado nuestro pasado autocrático. Y ese acuerdo simplemente no existe; las reacciones de los legisladores de oposición frente a los que Salinas rindió su informe, así lo demostraron. Las deficiencias de las elecciones del agosto fueron muchas e importantes y de ninguna manera merecen los elogios que sobre ellas se lanzaron en el informe salinista. Para empezar, la burocracia del IFE encabezada por Arturo Núñez actuó por su cuenta y con espíritu partidario, especialmente en las bases de la organización. El fiscal electoral, por el que tanto luchó la oposición, brilló por su irrelevancia; en la realidad sigue sin existir. Tampoco existe el control sobre los gastos del partido del Estado; algunos cálculos señalan sobrepaso, por varias veces, la ya de por si insultante y absurda suma de 922 millones de nuevos pesos. Los candidatos del partido de Estado siguieron usando recursos

públicos. El maridaje entre el gran capital y el PRI fue tan abierto, que se llegó al descaro de intentar pedir en presencia de Carlos Salinas 25 millones de dólares para el PRI a 25 multimillonarios convocados para el efecto. La parcialidad de la televisión en favor del PRI y el gobierno fue igualmente descarada, al punto que esa televisión tiene mayor cercanía con la extinta televisión soviética que con la propia de las democracias. La censura en la radio se hizo notar mediante el despido de varios conductores de noticiario que pretendieron mostrar o acercarse a la imparcialidad democrática. Las irregularidades en el proceso mismo de votación fueron tales, que permitieron, por ejemplo, que el PAN obligara al gobierno a renunciar a su supuesto triunfo en Monterrey. Y la lista puede seguir: los perredistas asesinados, el padrón, el "voto verde", la narcopolítica, la injusticia del sistema judicial, etcétera.

En conclusión, el sexenio de Carlos Salinas usó los mecanismos del autoritarismo político en favor de su revolución económica neoliberal. La transición a la democracia no se hizo, nos estacionamos en un régimen híbrido. Es importante que la élite del poder -políticos, altos burócratas, empresarios, el clero y Washington- se percate de una de las conclusiones de Philippe Schmitter -y de muchos otros-: los sistemas híbridos son ilegítimos e inestables por naturaleza. Y la inestabilidad política es uno de los peores obstáculos para el buen funcionamiento de un sistema económico abierto y muy dependiente del ingreso masivo de capital externo, como es hoy más que nunca el mexicano.

